zaciones, según veremos más adelante, pero en ninguna forma deben coartar la libertad de discusión.

Debe entenderse claramente que la responsabilidad de mantener calidad racional y dignidad intelectual recaerá exclusivamente sobre los auspiciadores y participantes, sin que la institución sea responsable. Muchas veces las administraciones universitarias se han preocupado excesivamente por que las reuniones y expresiones de estudiantes o profesores puedan tomarse como representativas de la calidad institucional. Es preciso tener reglamentación que impida falsas representaciones en este sentido, pero en un ambiente de genuina libertad la dirección universitaria no puede ser responsable de los innumerables grados de calidad.

3. Nos parece muy adecuada la nueva disposición de permitir invitaciones a "cualquier participante", eliminándose así la anterior prohibición contra la celebración de actos en que participasen líderes partidistas.

También nos parece necesario que las entidades auspiciadoras deben dar notificación adecuada a la administración para que ésta pueda presentar sus puntos de vista sobre la prudencia o deseabilidad del acto, pero la decisión final debe recaer en la persona o agrupación que haya propuesto la invitación.

4. Debe eliminarse la restricción en contra de "actividades de proselitismo político."

Esta prohibición es contraria a la libertad de expresión. Además es muy ambigua y se presta para ejercer censura previa, como ocurría con la prohibición de "actividades partidistas" y "agitaciones políticas" bajo el viejo Capítulo X del Reglamento. Como proselitismo político quiere decir "ganar seguidores", entonces cualquier discusión de un tema político puede entenderse como una influencia tendente a conseguir prosélitos. Aún más, es prácticamente imposible discutir cualquier tema político de actualidad sin ejercer dicha influencia de ganar adeptos. La referida prohibición, en manos estrictas, limitaría enormemente la nueva norma de libre selección de temas y conferenciantes, hasta el punto de asemejarla mucho a las viejas disposiciones de 1950. Nótese que la participación de un líder político sería especialmente vulnerable a una interpretación restrictiva de la referida prohibición, porque es imposible que un líder partidista

hable sobre asuntos políticos sin influir para conseguir prosélitos.

Aunque el Reglamento se refiere exclusivamente a proselitismo de carácter político, nuestra posición es que no debe prohibirse ningún otro tipo de proselitismo—artístico, religioso, o de cualquier otra índole—dentro de los límites constitucionales.

5. La misma norma de libertad debe aplicarse a las actividades al aire libre, tales como piquetes, mítines o manifestaciones, sin prohibiciones absolutas. Estas actividades solamente deben estar sujetas a sus límites de legalidad constitucional y a que no perjudiquen las labores académicas.

El actual reglamento está redactado con ambigüedad en la parte aplicable a estos actos, porque no dice claramente si se prohíben aquellos mítines, piquetes o manifestaciones que sean de proselitismo político o todos los mítines, piquetes y manifestaciones, más todas las actividades de proselitismo político.

La interpretación hecha por el Presidente Jaime Benítez, en sus comentarios sobre las nuevas reglas, publicados el 6 de octubre de 1966, es que están prohibidos los piquetes y las manifestaciones porque siendo "fichas formas de expresión en la plaza pública y en la calle, quebrantan el estilo institucional y los supuestos del debate y la discusión racional en la Universidad."³⁶

En los incidentes del 28 de octubre de 1966, ocurridos en el Recinto de Río Piedras, se prohibió una "manifestación" al aire libre y se permitió un "mitín" dentro del Teatro de la Universidad, ambos con los mismos propósitos y temas de comemoración los acontecimientos del 28 de octubre de 1964. Debe suponerse que las autoridades universitarias no entendieron que ninguno de los dos actos fuese de "proselitismo político" y que los mítines al aire libre están todos prohibidos aunque no sean de "proselitismo político".

Los mítines, las manifestaciones y los piquetes son formas de expresión de uso frecuente en la actualidad. Conlleva riesgos de trascender su calidad de medio de expresión para convertirse en formas de desorden, coacción o intimidación. Es grande el riesgo en este sentido. Ciertamente las manifesta-

³⁶ Las Nuevas Reglas Aprobadas por el Consejo sobre Actividades Extracurriculares en la Universidad (mimeografiado), 6 de octubre de 1966, párr. 4. En estos comentarios el Presidente consigna prohibido absolutamente el uso de altoparlantes. El Reglamento sólo dice que se requiere autorización escrita.

ciones y los mítines no deben permitirse cerca de los edificios donde se desarrollan las actividades normales de la institución, ni en ninguna forma que interrumpa el libre tránsito o se preste para coartar la libertad de las personas que no quieran participar o dejarse influir.

Es razonable que las autoridades universitarias designen áreas donde puedan celebrarse manifestaciones y mítines, como el campo atlético o los terrenos cubiertos de grama en las entradas principales del campus.

En cuanto a los piquetes, la Universidad debe reglamentarlos en cuanto a sitio, número de participantes y otras circunstancias de manera que no interrumpen las labores académicas ni el tránsito.

Lo que no nos parece aceptable es que se prohiban estos u otros tipos de actos al aire libre, pues los estudiantes necesitan educarse en el uso pacífico y respetuoso de estos medios de reunión y expresión. Fuera de la Universidad se utilizan tales actividades en forma reglamentada y pacífica por trabajadores, miembros de partidos políticos y otras agrupaciones, bajo garantías constitucionales. Los universitarios tienen esos mismos derechos dentro y fuera del ámbito universitario y debemos suponer que pueden hacer buen uso de ellos.

6. Nos parece injustificadamente restrictiva la disposición del reglamento actual que prohíbe "el uso de altoparlantes salvo autorización escrita." Por razón de que carece de normas adecuadas debe eliminarse.

Es curioso que el reglamento vigente permita el uso de altoparlantes con autorización escrita, mientras prohíbe los piquetes, las manifestaciones y los mítines, y requiere que todos los actos se celebren en los auditorios o salones. Debe suponerse, pues, que las autorizaciones para el uso de altoparlantes serán únicamente para actividades dentro de los auditorios o salones. Es preferible una norma permitiendo el uso de altoparlantes excepto en forma que interrumpa o afecte adversamente las labores académicas. Si esta regla se estatuye, entonces deja de ser ambiguo y se justifica el requisito de solicitar autorización escrita, pues va acompañado de criterios para conceder o denegar el permiso.

Estos instrumentos pueden ser indeseables dentro del campus porque los sonidos producidos por ellos son de tanto volumen

que pueden interrumpir las labores académicas. Es posible, sin embargo, que en algún mitin o en una ceremonia, el uso de un altoparlante debidamente regulado no afecte adversamente la actividad docente, limitándose al grupo que ha concurrido libremente para participar en el acto.

C—Otros *problemas fundamentales*

Hemos citado anteriormente las disposiciones de la Ley de la Universidad que establecen el procedimiento para la formulación del Reglamento General de Estudiantes, mediante un Proyecto de Reglamento de cada recinto, preparado por el Decano de Estudiantes con la colaboración de un comité de representantes estudiantiles, cuyo proyecto se remitirá al Senado Académico para su consideración, luego pasará a la Junta Universitaria y finalmente será considerado por el Consejo de Educación Superior para su aprobación.

El Proyecto del Reglamento General de la Universidad debe ser formulado primero por la Junta Universitaria, cuya composición, según dispone la Ley, es la siguiente:

"El Presidente de la Universidad, quien presidirá; los rectores de los recintos universitarios de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas; . . . el director de toda otra unidad institucional autónoma que se creare; el Director de Finanzas y tres funcionarios adicionales nominados por el Presidente con la aprobación del Consejo, y por un representante elegido por cada Senado Académico de entre sus miembros que no sean ex-officio."³⁷

El Proyecto de la Junta Universitaria será sometido a examen de los senados académicos y, con los informes de éstos, a la consideración y aprobación final del Consejo de Educación Superior.³⁸

Todavía estos procesos están en sus comienzos de estudio preliminar, sin que se haya formulado ningún proyecto para el Reglamento General o el de Estudiantes. En consecuencia, no parece que nuestras recomendaciones se presenten en un momento oportuno, en que ya se han podido apreciar los problemas suscitados por la actual formulación provisional del Capítulo 7 del Reglamento y aún están por reconsiderarse todas las disposiciones reglamentarias. Se debe recordar que en el present

³⁷ Artículo 6-A.

³⁸ *Ibid.*, Artículo 6-D (1).

informe nos interesan solamente los aspectos más directamente relacionados con la libertad académica. En este ámbito nuestras recomendaciones, en adición a las ya expresadas en torno al Capítulo X, son las siguientes:

1. *Libertad de pensamiento y expresión*

a—No se debe exigir permiso especial ni aplicar ninguna censura en cuanto a la distribución de material impreso o la colección de firmas, aunque esto no se debe permitir en los salones de clases, las bibliotecas y otros sitios de estudio, ni en ninguna forma que interrumpa las labores académicas o viole las leyes de Puerto Rico.

Esta recomendación se basa en las consideraciones expresadas anteriormente sobre la necesidad constitucional y universitaria de garantizar las libertades de pensamiento y expresión. La distribución de material impreso y la colección de firmas son sólo formas específicas de dichas libertades y no conllevan tantos riesgos de subvertir el orden como los mítines, las manifestaciones, los piquetes o el uso de altoparlantes.

b—Por iguales razones de que la libertad de prensa es una fase de las libertades de pensamiento y expresión, debe permitirse libremente en el ámbito universitario la publicación y distribución de periódicos por estudiantes y miembros de la facultad, sujetos a las mismas normas de legalidad que prevalecen en la comunidad externa, sin ninguna censura institucional.

Varios periódicos han venido circulando esporádicamente en el Recinto de Río Piedras. Algunos se han limitado a determinadas facultades o grupos como, por ejemplo, la "Gaceta de Ciencias Sociales" y la "Gaceta de Humanidades" de los consejos de estudiantes de dichas dos facultades; "Sociales Informa" de la Sección de Ciencias Sociales de la F.U.P.I. y "El Guabá" del Círculo Independientista de Estudiantes de Derecho. Otros han sido auspiciados por agrupaciones políticas, como "Información Estudiantil" de la F.U.P.I.; "Adelante", de la Asociación Pro Estidad; y "Estudiante", del Grupo de Estudiantes Anticomunistas. Hay periódicos de índole no-partidista con información general y libre confrontación de ideas, como "Brecha" y "Conquista". Circundan revistas estudiantiles como "Escalera", que conmemora en su título el "teach in" de 1965; y "Surco," que es de carácter literario.

Todas estas publicaciones operan con gran escasez de recursos y los correspondientes sacrificios por parte de sus auspiciadores. La administración universitaria debe considerar la posibilidad de brindar ayuda a los periódicos de profesores y estudiantes sin interferir con su libertad de prensa. Con el mismo propósito debe estudiarse la conveniencia de publicar periódicos institucionales que sean ejemplos de alta calidad, inclusive que contengan debates y críticas sobre temas importantes. Es igualmente recomendable que el Consejo General de Estudiantes autorizado por la nueva ley tenga un periódico propio, administrado por estudiantes que el Consejo designe, con subvención oficial.

Comprendemos los riesgos de malas interpretaciones y hostilidades que pueden surgir de la ayuda oficial, pero los educadores tienen la responsabilidad de confrontar estos y otros problemas mayores para alcanzar el cumplimiento de sus finalidades. Su esfuerzo en este sentido puede estar coordinado con la proyectada Escuela de Periodismo y Comunicaciones que tanta falta hace en Puerto Rico y que la Universidad ha prometido establecer próximamente.

En las mejores universidades de los Estados Unidos los periódicos estudiantiles tienen un gran efecto educativo y operan con libertad, sin restricciones oficiales. En muchos casos cuentan con ayudas de las administraciones universitarias, aunque algunos de los mejores se mantienen por el esfuerzo independiente de los estudiantes. El problema de si debe haber ayuda oficial es muy debatible y ha de tratarse con sumo cuidado para que no se incurra en restricciones de la libertad de prensa o en suspicacias mutuas de consecuencias negativas.

c—Los miembros del personal docente deben abstenerse de utilizar sus cátedras y posiciones de autoridad para inculcar a los estudiantes. Al contrario, deben cultivar en los alumnos la independencia de criterio y la capacidad individual para juzgar los méritos de los problemas y sus posibles soluciones. Aunque corresponde a los profesores ejercer sus libertades de pensamiento y expresión, no pueden descuidar su misión educativa, mucho menos, convertirse en propagandistas.

Es responsabilidad de los dirigentes universitarios fomentar tales actitudes mediante los procesos normales de selección, educación y evaluación del personal.

En este campo no hemos encontrado evidencia de problemas ni en las transcripciones de nuestras audiencias públicas ni en las otras investigaciones realizadas por nuestros asesores. El Presidente Jaime Benítez y otros funcionarios universitarios declararon ante nosotros no conocer situaciones de abuso de la cátedra o de otras posiciones de autoridad para la indoctrinación de los estudiantes.

d—Endosamos las normas enunciadas por el Informe del Comité del Gobernador sobre el principio del mérito en su aplicación a profesores de ideas minoritarias:

“El principio de considerar individualmente a cada persona por sus méritos profesionales para la labor requerida, nos parece el único aceptable. El fanatismo o la intolerancia del candidato puede ser, en un caso individual, suficiente causa de inelegibilidad. Nadie, no importa el mayor o menor radicalismo de sus preferencias políticas, tiene derecho a usar una cátedra para la indoctrinación partidista. Tampoco puede ser escudo para la incompetencia el pertenecer a un grupo minoritario. Un maestro que en sus clases deje de enseñar las materias correspondientes para dedicarse a discutir temas irrelevantes, políticos o de cualquier otra clase, puede ser destituido por incumplimiento de su deber. Ahora bien, en el sentido opuesto no debe excluirse a una persona por el mero hecho de pertenecer a un determinado grupo de opinión, o por tener individualmente ideas minoritarias, aun revolucionarias. La cuestión tiene que plantearse en términos de la capacidad particular para una determinada tarea.”³⁹

Estos principios fueron aplicados adecuadamente en el caso del profesor José María Lima, quien declaró públicamente ser marxista-leninista.⁴⁰ A pesar de fuertes expresiones de opinión pública de parte de personas muy influyentes de la comunidad y algunos periódicos, el Lic. Jaime Benítez, entonces Rector, mantuvo al profesor en su cargo de carácter probatorio. Basó su decisión en las disposiciones de la Constitución y la Ley de la Universidad de 1942 garantizando la libertad académica, y fue respaldado por resoluciones de los senados académicos, el Claustro y el Consejo Superior de Enseñanza.

La acción administrativa tomada en el caso del profesor Lima fortalece las normas constitucionales que garantizan la libertad de pensamiento y expresión y prohíben los discriminados por ideas

políticas o religiosas, el cual fortalecimiento ha de tener peso en el futuro no solamente en otras actuaciones administrativas sino también en las judiciales.

Esta influencia del caso Lima contradice la actitud muy generalizada en la administración pública de que un contrato no-permanente puede terminarse sin explicaciones, aun por razones de desconfianza política, habiéndose manifestado esta actitud después de la huelga universitaria de 1947-48 en la terminación de varios contratos probatorios en la Universidad, y también en el Departamento de Instrucción, a raíz de la revuelta nacionalista de 1950, en las destituciones de dos profesionales del servicio exento con largo historial de servicios excelentes, a quienes se les terminó su trabajo sin explicaciones, por sospechas de que simpatizaban con el Partido Nacionalista.

Los profesores permanentes sólo pueden ser destituidos mediante formulación de cargos. Recomendamos que el Reglamento provea normas para impedir discriminaciones institucionales en el trato del personal con contratos no-permanentes y que establezca procedimientos para plantear y ventilar querrelas contra la violación de dichas normas.

e—Corresponde a los decanos, rectores y otros miembros de la dirección central abstenerse de participar en actividades partidistas en forma que perjudique la autonomía universitaria y los propósitos educativos de la institución. Esta es una norma de autodisciplina y moral social. No niega el derecho y la obligación de que los dirigentes universitarios se expresen sobre las cuestiones importantes del mundo contemporáneo, inclusive las que sean de interés controversial en Puerto Rico, aun las políticas. No debe impedirse que tales personas se expresen, porque debe respetarse su derecho de expresión individual y el pueblo necesita esa orientación. Lo que recomendamos es la abstención de actividades de propaganda, organización y administración de partidos políticos.

Nos parecen muy acertadas las palabras del Comité del Gobernador en su informe de 1959:

“Los decanos, el Rector y los miembros de la dirección central deben abstenerse de hacer manifestaciones públicas de carácter partidista y de participar en las campañas de los partidos. Las instituciones educativas tienen la misión de cultivar los valores fundamentales, más duraderos de la cul-

³⁹ Informe del Comité del Gobernador, op. cit., págs. 21.

⁴⁰ La declaración fue hecha el 30 de agosto de 1963.

tura, para así consolidar las bases de unidad y continuidad. Los directores deben comportarse como servidores públicos de carácter permanente. Si intervienen activamente en las campañas políticas, ponen en riesgo su imparcialidad para el rendimiento de los servicios oficiales y debilitan la reputación de las instituciones representadas por ellos. Su obligación es de simbolizar la misión educativa de largo plazo que tienen esas instituciones, por encima de las diferencias partidistas. Los mismos argumentos pueden aplicarse al personal docente en general pero sería muy grande el sacrificio de derechos políticos si todos los maestros estuviesen sujetos a la regla de abstención. Por eso hemos propuesto para ellos un canon de moderación y buen juicio."⁴¹

f.—También endosamos las normas propuestas por dicho Comité del Gobernador en cuanto a las actividades políticas de la facultad fuera del ámbito universitario. Estamos de acuerdo en que la aceptación de una candidatura para un cargo electivo debe conllevar licencia con sueldo durante el semestre anterior a la elección (el período de campaña) y sin sueldo para la duración de la incumbencia en el cargo, disponiéndose que la elección debe conllevar la renuncia del puesto universitario.

La administración universitaria ha seguido estas recomendaciones en algunos casos, no en todos, con la correspondiente falta de uniformidad y equidad.

Los profesores deben tener amplia libertad para participar en actividades fuera del ámbito universitario. Su formación personal y profesional como profesores supone respeto a la verdad y otros atributos de responsabilidad intelectual y moral, pero no pueden hacerse reglas específicas para ser sancionadas oficialmente. Nos limitamos a advertir que un profesor, al participar en la política u otras actividades, debe mantener siempre una conducta digna de su magisterio.

g. Los estudiantes deben tener plena libertad para participar en actividades políticas, religiosas o de cualquier otra índole fuera del campus, bajo su propia responsabilidad y las leyes del país. La condición de ser estudiante no impone las obligaciones señaladas anteriormente con respecto a los dirigentes y profesores universitarios.

2. *Informaciones a terceras personas sobre los universitarios.*

a. Las autoridades universitarias no deben divulgar ninguna información sobre las ideas y preferencias valorativas de sus

⁴¹ Informe del Comité del Gobernador, op. cit., págs. 34.

estudiantes, profesores u otros miembros de su personal, ni sobre ningún otro aspecto de su conducta como tales miembros de la comunidad universitaria en forma alguna que contribuya a delitos o crímenes institucionales "por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas", o a cualquier violación de sus derechos civiles.

La educación universitaria supone una relación confidencial entre el estudiante y sus mentores, de amplia libertad para considerar hipótesis y ponerlas a prueba, inclusive para cometer equivocaciones y tener la oportunidad de corregirlas. Si los alumnos y profesores no tienen la seguridad de que tales esfuerzos se han de mantener como comunicaciones privilegiadas—iguales que las de un médico con su paciente o un sacerdote con su feligrés—las inhibiciones y los temores coartarán el ambiente de libertad y se empobrecerá la calidad de la enseñanza. Por estas razones, los maestros y dirigentes universitarios deben tener presente que las informaciones a agentes gubernamentales o patronos pueden hacer daño a los derechos de los estudiantes y a las prácticas institucionales.

En este terreno no es posible fijar reglas absolutas, pues son inevitables y convenientes las apreciaciones de las autoridades académicas sobre la calidad de la labor estudiantil. Nuestra recomendación en este punto se limita a una advertencia de que los senados académicos consideren las formas específicas de alentar el buen juicio y la protección por parte de los funcionarios universitarios y, si es posible, formulen normas apropiadas a tales fines.

Las protecciones deben cubrir no sólo a los estudiantes sino también a los maestros, investigadores y otros miembros del personal académico.

b. La Comisión recomienda, además, que las autoridades universitarias deben estudiar cuidadosamente las formas de evitar que el presente sistema de servicio selectivo, que incluye diferimientos por razón de un programa universitario completo con notas satisfactorias, afecte adversamente los procesos de enseñanza y calificaciones o conlleve riesgos contra la libertad académica. Sin entrar en los méritos de las cuestiones ajenas a nuestro tema, relacionadas con el servicio selectivo y sus diferimientos, nos preocupa que los mencionados requisitos de efi-

ciencia académica sirvan para desvirtuar las tradiciones universitarias en los aspectos de libertad académica.

3. *Derechos de asociación.*

a. Debe regir el principio de libre asociación, permitiéndose asociaciones de fines políticos o partidistas, inclusive las que tengan afiliación con un partido, movimiento u organización externa. Sería conveniente que estas afiliaciones se hicieran públicas en el momento de registrarse la sociedad, para que puedan ser conocidas.

Esta libertad de asociación existe en las mejores universidades de Estados Unidos. Es cierto que en nuestro ambiente no tiene una tradición establecida y que presenta riesgos de agitación, especialmente por parte de los estudiantes. Confiamos, no obstante, en que la libertad hará normal y corriente la presencia de asociaciones de distintos puntos de vista, cada cual responsable por sus propios actos. Así dejarían de ser tan conspicuas las actividades de este tipo que hoy reciben mucha publicidad por ser escasas, excepcionales, la mayor parte de las veces contrarias a los reglamentos. La represión también conlleva riesgos graves de agitación estudiantil, como hemos visto en la experiencia reciente de la Universidad de Puerto Rico.

b. Las reglamentaciones de las asociaciones estudiantiles en cuanto a requisitos y procedimientos de organización y supervisión por la administración universitaria, aunque han sido muy liberales aparte de las censuras sobre actividades políticas partidistas, deben modificarse para facilitar la autonomía de las organizaciones.

(1) Por ejemplo, el Artículo 4(d) del Reglamento de Estudiantes estipula que el reconocimiento de las sociedades durará solamente un año. Es necesario solicitar la renovación al comienzo de cada año académico mediante una relación de ciertos datos específicos, tales como las actividades del año anterior y las enmiendas al reglamento, si las hubiere. Como hay alrededor de 90 organizaciones reconocidas o por reconocerse en Río Piedras y unas 56 en Mayagüez, los procedimientos de renovar el reconocimiento a veces son dilatorios.

Recomendamos que se elimine la limitación de un año y que el reconocimiento sea indefinido, pudiendo retirarse si no se someten los informes requeridos o no se cumple con cualquier

parte del reglamento que sea decisiva para mantener la autorización institucional.

(2) Otro requisito que no debe mantenerse en el nuevo reglamento es el de someter la lista de miembros para solicitar reconocimiento. No hace falta tanta especificación como condicción del reconocimiento.

(3) La disposición actual que deja a opción de la organización el tener un consejero es correcta y debe mantenerse. Por supuesto, en caso de tener consejero, debe ser por elección de la organización misma, como se permite actualmente.

(4) Se deben preservar y fortalecer las actuales prohibiciones contra el discrimen racial y social en las organizaciones estudiantiles. El problema debe estar bajo continuo escrutinio de la comunidad universitaria. Las solicitudes de reconocimiento deben ser objeto de investigaciones rigurosas para evitar el discrimen. Las autoridades universitarias deben considerar cuidadosamente la evidencia, las conclusiones y las recomendaciones del *Informe Preliminar de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes* que investigó los medios de selección de miembros en las fraternidades y sororidades y otras sociedades.⁴²

(5) El reconocimiento de las organizaciones estudiantiles debe responder a criterios y procedimientos establecidos por el Reglamento de Estudiantes, mediando participación estudiantil activa. La aplicación de las normas debe estar en manos de un comité de estudiantes y profesores, reservándose el derecho al Decano de Estudiantes y al Rector de revisar las apelaciones.

(6) Las facilidades de la Universidad se deben prestar, con la mayor liberalidad posible, a personas o grupos universitarios, aunque no sean reconocidos oficialmente, dándose prioridad a las asociaciones debidamente reconocidas.

c. Las asociaciones de profesores y otros miembros del claustro universitario deben ser permitidas libremente, con un mínimo de reglamentación, por el nuevo Reglamento General, sin censuras ni limitaciones en cuanto a las libertades de pensamiento y expresión. La aplicación de los reglamentos debe confiarse al Senado Académico, como organismo representativo del claustro y la administración. Estas mismas normas deben ser

⁴² Este informe fue mimeografiado con fecha de 14 de marzo de 1966 y se preparó de acuerdo con la R. de la C. 109, por un comité que presidió el Hon. Manuel Méndez Ballester.

aplicables a organizaciones mixtas de profesores y estudiantes, con la debida participaci6n del Decano de Estudiantes en materia de reconocimiento y supervisi6n.

4. *Etica y disciplina.*

a. Recomendamos que se organice en cada recinto un comit6 de 6tica para profesores y otro para estudiantes. El primero debe ser designado por el Senado Acad6mico. El segundo debe incluir representaci6n de los estudiantes y es recomendable que sus nombramientos los haga el Senado mediante consulta con el Consejo General de Estudiantes. Estos nombramientos de ambos comit6s deber6n ser por dos a6os, con oportunidad de ser renovados.

No nos corresponde entrar en los detalles de organizaci6n, funciones y procedimientos de las cuestiones 6ticas y disciplinarias, sino solamente en los aspectos esenciales de debido procedimiento. En este 6mbito entra la necesidad de que los indicados comit6s sean permanentes, para que hagan acopio de experiencia y mantengan uniformidad y equidad. Tambi6n es esencial que en el comit6 de 6tica para los profesores haya participaci6n de los claustrales, junto a los miembros de la administraci6n. Por esta raz6n recomendamos que la designaci6n la haga el Senado, donde se re6nen representantes elegidos por las facultades conjuntamente con los decanos y el Rector.

El comit6 para los asuntos estudiantiles debe incluir, adem6s de la representaci6n estudiantil, otra de profesores y administradores.

Estos comit6s permanentes deben tener la obligaci6n de hacer estudios y recomendaciones sobre las normas de 6tica y disciplina y entender directamente, o por medio de representantes seleccionados por ellos, en la adjudicaci6n de casos disciplinarios. Consideramos necesario que estos comit6s permanentes tengan la 6ltima autoridad dentro de la Universidad, para resolver los casos de adjudicaci6n, sujeta esta autoridad a revisi6n en cuestiones de derecho por el Consejo de Educaci6n Superior y finalmente por las cortes. No consideramos adecuadas las pr6cticas actuales de decisiones por los rectores, el Presidente o el Consejo de Educaci6n Superior, en sucesivos niveles de apelaci6n. Los comit6s permanentes que estamos recomendando, por su composici6n colegiada, brindan una oportunidad de justicia mejor que las decisiones unipersonales.

En la formulaci6n de las normas, las recomendaciones de estos comit6s deben pasar a los respectivos senados acad6micos.

Los reglamentos deber6n contener un procedimiento detallado para el funcionamiento de los comit6s, especialmente en los aspectos de adjudicaci6n. En estos aspectos de car6cter cuasijudicial, los directores administrativos de la instituci6n deber6n tener la responsabilidad de investigar y formular cargos, conjuntamente con el Rector del recinto correspondiente, inclusive para determinar suspensiones. En asuntos estudiantiles puede delegarse al Decano de Estudiantes la coordinaci6n en cada recinto.

Los reglamentos deber6n determinar cu6les faltas ser6n de importancia suficiente para requerir la intervenci6n de estos comit6s, pudiendo ser otras asignadas a la jurisdicci6n de los maestros, los directores de departamentos y los decanos.

b. Las normas de conducta para profesores y estudiantes deben expresarse en forma precisa y clara en los respectivos reglamentos. En la descripci6n de actos punibles no pueden permitirse frases ambiguas que se presten a interpretaciones arbitrarias, como algunas que se encuentran actualmente en el Articulo 3 del Reglamento de Estudiantes: "conducta indecorosa o impropia dentro de los l6mites universitarios", "todo acto individual que constituya una falta de respeto a un funcionario, profesor, empleado u otro alumno", o "la comisi6n de actos . . . que deslustren o desdoren el buen nombre y fama de la Universidad".

Hasta donde m6s sea posible, las normas deben ser uniformes para todos los recintos.

Estas normas deben esclarecerse en las decisiones de casos espec6ficos, en forma jurisprudencial, para evitar arbitrariedades y desarrollar un sistema de aplicaci6n equitativa.

c. Debe evitarse en todo lo posible la suspensi6n de un profesor o estudiante mientras se ventilan los cargos de conducta impropia. Este recurso debe limitarse a casos excepcionales en que la continuaci6n de la persona en sus funciones pueda resultar en grave riesgo para ella misma, para otros miembros de la comunidad universitaria o para la instituci6n. La presunci6n de inocencia supone que los castigos no han de imponerse hasta que se determine la culpabilidad mediante un "debido

procedimiento". Por tanto no debe permanecer en el Reglamento de Estudiantes ninguna disposición absoluta parecida al Artículo 18 que autoriza al Decano de Estudiantes a "suspender sumariamente a cualquier estudiante pendiente de investigación de cualquier acto de indisciplina hasta tanto se esclarezcan las responsabilidades correspondientes."

d. En fin, todas las normas básicas de debido procedimiento de ley y calidad administrativa deben incluirse en los reglamentos sobre disciplina de profesores y estudiantes. No hay ninguna razón de edad o condición personal que justifique el que no se observen tales requisitos de debido procedimiento en el ámbito universitario.

e. Los reglamentos de ética y disciplina deberán ser aplicados sin vacilaciones, omisiones o amnistías. Toda conducta sancionada, provenga de actividades deportivas, políticas o de cualquier otra índole, tiene que ser objeto de adjudicación y castigo. Esto es esencial para la preservación de los derechos y las libertades en la Universidad, así como para la debida educación de profesores y estudiantes.

5. Sistema de mérito para la facultad.

a. No hemos encontrado evidencia de discrimenes institucionales en la administración del personal de la Universidad. En lo que se refiere al personal académico, clasificado en el Servicio Exento,⁴³ que incluye los puestos de presidente, rector, decanos, directores de departamentos, maestros, investigadores, técnicos, y otros supervisores y miembros profesionales de la facultad, las decisiones no reflejan discriminaciones institucionales "por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas".

⁴³ El Artículo 14-A de la Ley de la Universidad define así el Servicio Exento:

"A los fines de la Ley 345 del 12 de mayo de 1947 conocida como Ley de Personal, están comprendidos en el Servicio Exento comprenden los siguientes cargos universitarios: el Presidente, el Director de Finanzas, el Auditor, los rectores y directores de unidades institucionales, los Decanos, el Director del Servicio de Extensión Agrícola, el Director de la Estación Experimental Agrícola, el Director de las Empresas Universitarias, el Director de la Editorial, el Director de Terrenos y Edificios, los ayudantes de estos diversos funcionarios, los bibliotecarios y auxiliares de biblioteca, los miembros del personal docente de la Universidad de Puerto Rico, incluyendo todos sus colegas, escuelas, facultades y dependencias; el personal dedicado a tareas de investigación científica, histórica, de letras y artes y sus auxiliares; el personal técnico de la Universidad; el personal profesional y de su supervisión, relacionando con los diversos servicios a los profesores y a los estudiantes; y sus estancias honorarias de dicha institución que estén empujados durante el tiempo por la Universidad de Puerto Rico, incluída además el personal que el servicio exento de la Universidad de Puerto Rico incluída en las categorías anteriores según hayan sido o pudieren ser especificados por el Presidente y los rectores y directores, según corresponda, con la aprobación del Director de Personal de Puerto Rico."

b. Las quejas de trato arbitrario se refieren a decisiones sobre selección, permanencia, ascensos, licencias, compensaciones adicionales, viajes y otros aspectos, por falta de normas y por fallas en la discreción de los administradores, algunas veces por divisiones internas de grupos en conflicto frente a los problemas universitarios.

Es de esperarse que los procesos de consulta con las facultades y los Senados académicos para los nombramientos de los dirigentes administrativos, según establecidos por la nueva Ley, reduzcan las posibilidades de arbitrariedad de parte de los administradores y contribuyan a mejores relaciones entre la facultad y la administración.

De todos modos es necesario establecer un sistema de mérito en todos los aspectos del trato del personal para que las decisiones se basen en criterios de idoneidad y excluyan elementos ajenos al mérito.

c. El sistema de mérito debe incluir normas que procuren mayor publicidad, igualdad de oportunidades y objetividad en la selección de nuevos miembros de la facultad; más adecuadas medidas y procedimientos de supervisión y evaluación, incluyendo la calificación de la eficiencia; mejores condiciones de trabajo en cuanto a sueldos y beneficios marginales de seguros, viviendas y retiro; y más intensidad en el adiestramiento dentro del servicio para lograr más altos grados de calidad en el cumplimiento de los deberes institucionales.

d. Los problemas más serios se encuentran en las normas y prácticas sobre la permanencia. Estas deben mejorarse considerablemente. Es debatible el requisito actual de cinco años de servicio satisfactorio para adquirir el status de permanente. La Ley de 1942 requería solamente tres años pero una enmienda de 1949, hecha por consideraciones sobre la huelga universitaria de 1947-48, aumentó el período probatorio a cinco años. Aunque nos parece que tres años son suficientes para el proceso de iniciación y desarrollo de un nuevo miembro y para juzgar sus potencialidades básicas, éste es un problema que pueden juzgar mejor las autoridades universitarias desde el punto de vista de los principios de mérito.

Ahora bien, es preciso que se protejan los derechos de la facultad en la etapa del contrato probatorio para evitar abusos de autoridad. No basta con las recomendaciones que hemos

hecho anteriormente de que los reglamentos provean normas y procedimientos para evitar los discriminados inconstitucionales. Más allá de los problemas de constitucionalidad, en el terreno de la eficiencia administrativa y el trato justo de los profesores, hace falta que el período probatorio se utilice adecuadamente para adiestrar y evaluar a los principiantes. Cuando se pueda determinar, antes de los cinco años, la inelegibilidad del candidato para la permanencia, se le debe notificar tal decisión con prontitud, para evitarle perjuicios adicionales. De igual modo, debe ser posible conceder la permanencia por mérito antes de los cinco años, en casos excepcionales de mérito comprobado.

No se deben utilizar contratos temporeros o de conferenciantes para extender el período probatorio. A los profesores de tiempo completo con estos tipos de contrato se les debe evaluar periódicamente, igual que a los de contrato probatorio para determinar la elegibilidad con respecto a la permanencia.

Hemos entrado en estas cuestiones por considerar que las prácticas relacionadas con la permanencia, inclusive el sentimiento de seguridad de un profesor de que su período probatorio será juzgado con justicia, son elementos esenciales de la libertad académica. No queremos entrar en otras cuestiones de administración de personal que pertenecen al ámbito de determinaciones administrativas internas. Sólo nos corresponde afirmar el principio de mérito como salvaguarda de los derechos civiles de los universitarios.

6. *Participación de profesores y estudiantes en el gobierno institucional.*

a. Las disposiciones de la nueva Ley de la Universidad adecuadamente hacen posible la participación de profesores y estudiantes en la formulación de los reglamentos institucionales. Deben aplicarse con pleno vigor.

Según hemos visto, el Artículo 10(b) dispone la aprobación del Reglamento de Estudiantes por el Consejo de Educación Superior a propuesta de la Junta Universitaria y la responsabilidad por la elaboración de dicho Reglamento en cada recinto corresponde al Decano de Estudiantes "con la colaboración de un comité de estudiantes compuesto por un representante de cada facultad". El proyecto debe ser considerado por el Senado Académico antes de pasar a la Junta Universitaria y al Consejo.

Es de esperarse que sus recomendaciones tengan mucho peso. La Ley concibe a este organismo como "el foro oficial de la comunidad académica para la discusión de los problemas generales que interesen a la marcha de la Universidad."⁴⁴

Asimismo es muy deseable que se tomen en consideración cuidadosa las recomendaciones de los estudiantes en cuanto a los dos mencionados reglamentos, especialmente el de asuntos estudiantiles.

Como hemos indicado anteriormente, la nueva Ley de la Universidad ha mejorado notablemente la participación del claustro y el estudiantado en el gobierno de la institución a través de consultas de las facultades y los senados académicos para los nombramientos de los dirigentes universitarios; las disposiciones que hacen de los senados cuerpos representativos de la facultad y la administración con amplios poderes sobre los programas académicos y la administración del personal académico; las que crean un Consejo General de Estudiantes en cada recinto, un Consejo de Estudiantes en cada facultad y comités de estudiantes para asesorar a los organismos encargados de servicios y ayuda al estudiante; y otras disposiciones similares.

El Artículo 10, en su Cláusula D, dispone lo siguiente:

"El Consejo adoptará normas especiales relativas a la consulta, o participación o ambas, de los estudiantes en los procesos institucionales mediante los cuales se adoptan y se aplican las normas generales que rigen la vida académica de cada recinto."

Recomendamos que las autoridades universitarias den al Presidente del Consejo General de Estudiantes de cada recinto participación en el correspondiente Senado Académico, con voz y voto.

Bajo la Ley de 1942 y hasta las enmiendas motivadas por la huelga universitaria de 1947-48, el presidente del Consejo de Estudiantes era miembro de la Junta Universitaria, organismo que entonces entendía en el establecimiento de las normas académicas, las reglamentaciones sobre administración de personal y otras atribuciones que hoy corresponden a los senados académicos. Dentro del nuevo clima de más descentralización y participación democrática de la Ley de 1966, se justifica la representación estudiantil en los senados académicos, donde puede hacer aportaciones altamente constructivas.

⁴⁴ Ley de U.P.R., aprobada el 20 de enero de 1966, Art. 11, Cláusula C.

7. *La Guardia Universitaria.*

En el año 1959, el Comité del Gobernador describió las deficiencias de la policía universitaria en estos términos:

"Una de las amenazas más graves a los derechos fundamentales de los universitarios es la ausencia de un buen sistema de policía en el campus. No podemos comprender por qué los directores de la institución llevan tantos años sin demostrar suficiente conciencia del problema. El más alto centro de educación debe ser capaz de seleccionar y adiestrar personal idóneo y darle condiciones adecuadas de trabajo de modo que pueda atender el problema verdaderamente especial de protección y orden en una comunidad de universitarios. Así debe hacerse, sin transferir la obligación a la policía estatal, porque ella tiene menos recursos para una especialización de tal naturaleza y porque la transferencia rompería una tradición que tiene valiosos elementos de simbolismo educativo."⁴⁵

La situación es similar en este momento, a pesar de que la guardia universitaria ha tenido mejoramiento en aumento de personal y mejoramiento de su disciplina.

Recomendamos, urgentemente, que se corrija tal deficiencia y se considere la utilización de estudiantes, con el debido adiestramiento, para ayudar a mantener el orden en los recintos universitarios.

La Guardia Universitaria debe alcanzar niveles de eficiencia que sean suficientes para que la Policía Estatal no tenga que entrar al campus a mantener el orden en actividades estudiantiles. Debe continuarse la tradición de que la policía no interviene en dichas actividades a menos que sea llamada por el Rector o la persona autorizada por él. Por supuesto, en caso de un delito corriente la policía debe acudir inmediatamente. Estas normas de tradición universitaria deben ser protegidas a pesar de que en principio de ley la Policía Estatal tiene autoridad para entrar al campus cuando sea necesario.

8. *Educación sobre la libertad académica.*

La Universidad debe educar a estudiantes y profesores en las tradiciones de tolerancia y respeto mutuo que hacen posible un clima de libertad académica y también debe explicar activa y decididamente a la comunidad toda por qué es indispensable garantizar los derechos de su facultad y estudiantado.

⁴⁵ Informe del Comité del Gobernador, op. cit. pág. 36.

Creemos que se ha exagerado la propaganda en favor de la doctrina de la Casa de Estudios hasta el punto de que, dentro y fuera de la Institución, se defiende por muchas personas la conveniencia de mantener normas restrictivas para que los universitarios se dediquen exclusivamente a sus quehaceres profesionales sin activar las discusiones sobre temas controvertidos.

Es evidente que la libertad presupone responsabilidad. Cada persona hace posible sus derechos mediante el respeto de los ajenos. Todos los universitarios deben contribuir con ejemplos de autodisciplina para que sea posible el pleno disfrute de la libertad académica en paz y orden.

La Comisión de Derechos Civiles ofrece a la Universidad su cooperación para llevar a cabo actividades educativas que promuevan a la comprensión de la libertad académica por parte de los universitarios y del público en general.

IV. **Resumen de recomendaciones**A—*Normas legislativas*

Deben restablecerse en la Ley de la Universidad las secciones 15 y 25 de la Ley de 1942 que garantizaban respectivamente la libertad de cátedra y los derechos políticos y civiles al personal docente, técnico y administrativo y las libertades de los estudiantes de asociarse, llevar a cabo actividades, reunirse, y editar publicaciones. Estas disposiciones estatutarias deben incluir aquellas otras recomendaciones del presente informe que sean aceptadas y se consideren de suficiente importancia y permanencia como para no estar sujetas a enmiendas internas de los reglamentos.

B—*El actual Capítulo X del Reglamento*

1. Deben permitirse libremente las actividades de carácter político o partidista siempre que no alteren el orden ni interrumpen las labores universitarias. No debe existir ningún tipo de censura en cuanto a los temas a discutirse, las posiciones ideológicas a expresarse y el estilo de la expresión, salvo las limitaciones legales permitidas constitucionalmente.

2. El Artículo 2 del Capítulo X, el cual dispone que las actividades extracurriculares se llevarán a cabo "en forma libre y responsable y dentro del proceso de diálogo y debate universita-

rio", no debe interpretarse en ninguna forma en que las autoridades universitarias puedan establecer límites de censura o coartar las libertades de pensamiento y expresión.

3. La misma interpretación liberal debe prevalecer en cuanto al Artículo 1 que requiere la aprobación del Rector, o las personas en quienes él haya delegado en cuanto a "la hora, día y la manera en que estos actos se llevarán a cabo en forma de no interrumpir la labor docente ni el buen orden universitario. . . ."

4. La aplicación de estas normas debe hacer posible que las libertades de pensamiento y expresión solamente tengan las mismas limitaciones que el derecho constitucional permite fuera del campus universitario en cuanto al contenido y estilo de las expresiones.

5. Debe mantenerse la disposición que permite invitar a las actividades extracurriculares a cualquier participante que los auspiciadores seleccionen, eliminándose así la anterior prohibición contra la celebración de actos en que participasen líderes partidistas.

6. Debe eliminarse la restricción en contra de "actividades le proselitismo político;" no debe prohibirse ningún tipo de proselitismo—artístico, religioso, o de cualquier otra índole—que se manifieste dentro de los límites legales y constitucionales.

7. La misma norma de libertad debe aplicarse a las actividades al aire libre, tales como piquetes, mítines o manifestaciones, sin prohibiciones absolutas. Estas actividades solamente deben estar sujetas a sus límites de legalidad constitucional y a que no perjudiquen las labores académicas.

8. Es razonable que las autoridades universitarias designen áreas donde puedan celebrarse manifestaciones y mítines, como el campo atlético o los terrenos cubiertos de grama en las áreas principales del campus.

9. En cuanto a los piquetes, la Universidad debe reglamentarlos en cuanto a sitio, número de participantes y otras circunstancias de manera que no interrumpen las labores académicas ni el tránsito.

10. Debe eliminarse la disposición del reglamento actual que prohíbe "el uso de altoparlantes salvo autorización escrita". Es

preferible una norma permitiendo el uso de altoparlantes excepto en forma que interrumpa o afecte adversamente las labores académicas.

C—Otros problemas fundamentales

1. Libertad de pensamiento y expresión.

a. No se debe exigir permiso especial ni aplicar ninguna censura en cuanto a la distribución de material impreso o la colección de firmas, aunque esto no se debe permitir en los salones de clases, las bibliotecas y otros sitios de estudio, ni en ninguna forma que interrumpa las labores académicas o viole las leyes de Puerto Rico.

b. Debe permitirse libremente en el ámbito universitario la publicación y distribución de periódicos por estudiantes y miembros de la facultad, sujetos a las mismas normas de legalidad que prevalecen en la comunidad externa, sin ninguna censura institucional.

c. La administración universitaria debe considerar la posibilidad de brindar ayuda a los periódicos de profesores y estudiantes sin interferir con su libertad de prensa.

d. Debe estudiarse la conveniencia de publicar periódicos institucionales que sean ejemplos de alta calidad, inclusive que contengan debates y críticas sobre temas importantes.

e. Es igualmente recomendable que el Consejo General de Estudiantes, autorizado por la nueva ley, tenga un periódico propio, administrado por estudiantes que el Consejo designe, con subvención oficial.

f. Los miembros del personal docente deben abstenerse de utilizar sus cátedras y posiciones de autoridad para inculcar a los estudiantes. Al contrario, deben cultivar en los alumnos la independencia de criterio y la capacidad individual para juzgar los méritos de los problemas y sus posibles soluciones. Aunque corresponde a los profesores ejercer sus libertades de pensamiento y expresión, no pueden descuidar su misión educativa, mucho menos, convertirse en propagandistas.

g. Las autoridades universitarias deben fomentar tales actividades mediante los procesos normales de selección, educación y evaluación del personal.

h. Endosamos las normas anunciadas por el Informe del Comité del Gobernador sobre el principio del mérito en su aplicación a profesores de ideas minoritarias:

“El principio de considerar individualmente a cada persona por sus méritos profesionales para la labor requerida, nos parece el único aceptable. El fanatismo o la intolerancia del candidato puede ser, en un caso individual, suficiente causa de inelegibilidad. Nadie, no importa el mayor o menor radicalismo de sus preferencias políticas, tiene derecho a usar una cátedra para la indoctrinación partidista. Tampoco puede ser escudo para la incompetencia el pertenecer a un grupo minoritario. Un maestro que en sus clases deje de enseñar las materias correspondientes para dedicarse a discutir temas irrelevantes, políticos o de cualquier otra clase, puede ser destituido por incumplimiento de su deber. Ahora bien, en el sentido opuesto no debe excluirse a una persona por el mero hecho de pertenecer a un determinado grupo de opinión, o por tener individualmente ideas minoritarias, aun revolucionarias. La cuestión tiene que plantearse en términos de la capacidad particular para una determinada tarea.”⁴⁶

i. Recomendamos que el Reglamento provea normas para impedir discriminaciones institucionales en el trato del personal con contratos no permanentes y que establezca procedimientos para plantear y ventilar querrelas contra la violación de dichas normas.

j. Los decanos, rectores y otros miembros de la dirección central deben abstenerse de participar en actividades partidistas en forma que perjudique la autonomía universitaria y los propósitos educativos de la institución. Esta es una norma de auto-disciplina y moral social. No niega el derecho y la obligación de que los dirigentes universitarios se expresen sobre las cuestiones importantes del mundo contemporáneo, inclusive las que sean de interés controversial en Puerto Rico, aun las políticas.

k. Endosamos las normas propuestas por el Comité del Gobernador en cuanto a las actividades políticas de la facultad fuera del ámbito universitario. Estamos de acuerdo en que la aceptación de una candidatura para un cargo electivo debe conllevar licencia con sueldo durante el semestre anterior a la elección (el período de campaña) y sin sueldo para la duración de la incumbencia en el cargo, disponiéndose que la reelección debe conllevar la renuncia del puesto universitario.

⁴⁶ *Ibid.*, párc. 31.

1. Los profesores deben tener amplia libertad para participar en las actividades fuera del ámbito universitario, conservando siempre conducta digna de su magisterio, como norma de formación profesional y auto-disciplina.

m. Los estudiantes deben tener plena libertad para participar en actividades políticas, religiosas o de cualquier otra índole fuera del campus, bajo su propia responsabilidad y las leyes del país.

2. *Informaciones a terceras personas sobre los universitarios.*

a. Las autoridades universitarias no deben divulgar ninguna información sobre las ideas y preferencias valorativas de sus estudiantes, profesores y otros miembros de su personal, ni sobre ningún otro aspecto de su conducta como tales miembros de la comunidad universitaria, en forma alguna que contribuya a discriminaciones institucionales “por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas”, o a cualquier violación de sus derechos civiles.

b. Las autoridades universitarias deben estudiar cuidadosamente las formas de evitar que el presente sistema de servicio selectivo, que incluye diferimientos por razón de un programa universitario completo con notas satisfactorias, afecte adversamente los procesos de enseñanza y calificaciones o conlleve riesgos contra la libertad académica.

3. *Derechos de asociación.*

a. Debe regir el principio de libre asociación, permitiéndose asociaciones de fines políticos o partidistas, inclusive las que tengan afiliación con un partido, movimiento u organización externa. Sería conveniente que estas afiliaciones se hicieran públicas en el momento de registrarse la sociedad, para que puedan ser conocidas.

b. Las reglamentaciones de las asociaciones estudiantiles en cuanto a requisitos y procedimientos de organización y supervisión por la administración universitaria, aunque han sido muy liberales aparte de las censuras sobre actividades políticas partidistas, deben modificarse para facilitar la autonomía de las organizaciones.